Felipe Ossa Guzmán

Árbitro Arbitrador

Fecha de Sentencia: 21 de enero de 2016

ROL: 2108-2014

MATERIAS: Acción de Rendición de Cuentas.

RESUMEN DE LOS HECHOS: XX fondo de inversión privado y ZZ Ltda. (ZZ), sostuvieron negociaciones para que el primero realizara una inversión en el conglomerado conocido como Grupo TR, dedicado al giro de servicios funerarios, que atravesaba por un momento de falta de liquidez.

La intención original de las partes era que la inversión de XX se materializara mediante una compra de acciones de la sociedad TRa), que formaba parte del Grupo TR. Sin embargo, existían impedimentos estatutarios que impedían a ZZ perder el control de TRa). Por esta razón, las partes acordaron que la inversión se concretaría “aguas arriba” mediante un aumento de capital por XX en la sociedad TR1.

Las partes también acordaron que XX tendría el derecho a nombrar un director titular y uno suplente en TRa), pese a no ser accionista de dicha sociedad; obligándose además ZZ a que los accionistas de TR1 suscribirían un pacto que estableciera la creación de un Comité Financiero para el asesoramiento de TRa), en el cual XX tendría derecho de participación activa.

Todos estos acuerdos se plasmaron en el documento denominado “Cierre de Negocios”, suscrito el 26 de julio de 2012, entre ZZ y XX.

En cumplimiento del Cierre de Negocios, mediante aumentos de capital de fecha 30 de agosto y 28 de septiembre de 2012, el Fondo XX adquirió 35.135.136 acciones en la sociedad TR1, equivalentes a su 14,94%. Y con fecha 19 de noviembre de 2012 fue suscrito el pacto de accionistas de TR1, que creó el Comité Financiero que asesoraría a TRa).

XX alega que con posterioridad a la suscripción de dichos instrumentos, se presentaron irregularidades en la administración del Grupo TR, tales como: la suspensión del Comité Financiero; operaciones con empresas relacionadas sin el debido control y sin cumplir con la normativa vigente; reconocimiento de deudas a bancos y empresas relacionadas; inasistencia a sesiones de directorios por los directores afines a ZZ; citaciones a sesiones de Directorio de manera irregular, sin cumplimiento a los plazos de citación exigidos en las leyes y estatutos sociales; y, por último, que importantes activos del Grupo TR eran objeto de “agresiones jurídicas” (demandas interpuestas por terceros a su respecto) no informadas durante las negociaciones.

En este escenario, XX interpone acción de rendición de cuentas en contra de ZZ para que éste sea obligado a rendir cuentas respecto de la administración de TR1, y de todo el resto de las sociedades que componen el Grupo TR. Para ello, se funda en que la estructura societaria de dicho conglomerado correspondería al de una “sociedad cascada”.

LEGISLACIÓN APLICADA: Artículo 2.155 del Código Civil, respecto a la obligación del mandatario de rendir cuenta de su gestión, Artículo 46 de la Ley 18.046, sobre la obligación de los directores de informar a los accionistas y al público en general sobre la situación legal, económica y financiera de la sociedad. Principio de separación de la personalidad jurídica entre la sociedad y sus socios, consagrado en el Artículo 2.053, inciso segundo, del Código Civil.

DOCTRINA: La acción de rendición de cuentas procede tratándose de relaciones de carácter fiduciario en que existe administración de un patrimonio ajeno por un tercero. En la especie, la relación entre el demandante y el demandado no tiene tal carácter, pues ambos sólo comparten la calidad de accionistas en una misma sociedad. En consecuencia, el demandado carece de legitimación pasiva para ser demandado para rendir cuentas.

Por otra parte, la sola circunstancia de que el demandante haya obtenido, mediante un pacto de accionistas, el derecho contractual a designar un director en otras sociedades del Grupo TR, no acredita una supuesta intención de las partes de conferir derechos generales al demandante en la administración de las diversas sociedades que conforman el Grupo TR. Por el contrario, se trata de acuerdos específicos que no alteran las normas sobre la administración de sociedades que rigen en nuestro ordenamiento jurídico; en particular el principio fundamental de separación de la personalidad jurídica entre la sociedad y sus socios consagrado en el Artículo 2.053, inciso segundo del Código Civil.

SENTENCIA ARBITRAL:

En Santiago, a 21 de enero de 2016.

VISTOS:

I. ANTECEDENTES PRINCIPALES DEL PROCESO ARBITRAL

1. El presente arbitraje se inició el 22 de julio de 2013 mediante presentación de XX, domiciliado en DML1, comuna de Las Condes, y representada por don F.A. (en adelante, también el Demandante), escrita a fs. 1 y siguiente de autos, dirigida al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), con el objeto que ZZ Ltda., domiciliado en DML2, comuna de Providencia (en adelante, también el Demandado) le rinda cuenta detallada respecto a su administración del "Grupo Económico TR)", haciendo expresa reserva respecto a las eventuales acciones civiles y penales que le pudieran corresponder.

2. Entre los instrumentos acompañados a la solicitud de arbitraje se encuentra una copia simple del documento denominado "Cierre de Negocios" (en adelante, también el "Contrato"), suscrito entre las partes con fecha 26 de julio de 2012; una copia simple del documento denominado "Modificación al Cierre de Negocios", suscrito entre las partes con fecha 31 de julio de 2012; y copia simple del Mandato Judicial otorgado con fecha 31 de diciembre de 2013 por XX a don AB.

3. El documento denominado "Cierre de Negocios" establece en su cláusula novena que:

“Cualquier duda o dificultad entre las Partes que surja respecto de este documento será resuelta por un Árbitro Arbitrador a designarse de común acuerdo. En caso de no producirse tal acuerdo, o a requerimiento de cualquiera de ellas por sí sola, la designación del Árbitro será efectuada por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., a quien las partes confieren poder especial irrevocable desde ya para que designe al Árbitro Arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de dicha Cámara, el cual deberá resolver la controversia conforme al reglamento pertinente del mismo Centro, el que es conocido y aceptado por las Partes”.

4. Con fecha 30 de julio de 2014, considerando la solicitud de arbitraje referida, la cláusula de arbitraje transcrita, lo acordado por el Consejo Directivo del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago con fecha 24 de julio de 2014 y lo dispuesto en el Artículo 11° del Reglamento Procesal de Arbitraje del CAM (en adelante, “el Reglamento”), don Peter T. Hill, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., resolvió designar Árbitro Arbitrador al suscrito, para abocarse a conocer y resolver la controversia existente en torno al Contrato. Dicha designación fue debidamente notificada a las partes, según consta a fs. 10 de autos.

5. Con fecha 13 de agosto de 2014, don L.F., en representación del Demandado, presentó un escrito opinando, en lo principal, excepción de incompetencia del Tribunal y, en subsidio, solicitando la recusación amistosa del suscrito. En este mismo escrito, confirió patrocinio y poder al abogado don AB1.

6. Rolan a fs. 16 y siguientes los siguientes documentos: **(i)** copia simple de la escritura de constitución de la Sociedad Inversiones ZZ Limitada, otorgada con fecha 19 de diciembre de 1989, en la Notaría de Santiago de don NT; **(ii)** copia simple de la protocolización del extracto de constitución de dicha sociedad, otorgado con fecha 17 de enero de 1990, en la Notaría de Santiago de don NT; y **(iii)** copia simple de una modificación de la sociedad ZZ, otorgada con fecha 29 de agosto de 1997, en la Notaría de Santiago de don NT1.

7. El suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador con fecha 19 de agosto de 2014, según consta en el acta de fs. 29, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.

8. Con fecha 28 de agosto de 2014, mediante resolución rolante a fs. 30, este Árbitro tuvo por constituido el arbitraje y citó a las partes a una primera audiencia. En esta misma resolución fue resuelta la excepción dilatoria opuesta por el Demandado, estableciéndose que debía ser formulada en la oportunidad correspondiente. Por su parte, la solicitud de recusación amistosa fue rechazada, por no haber sido interpuesta ante el Consejo del CAM ni fundarse en una causa legal. Asimismo, mediante la resolución referida se tuvo presente el patrocinio y poder otorgado a don AB1.

9. Posteriormente, a requerimiento del Demandante a fs. 33, por resolución de fs. 35 se fijó como nuevo día y hora para la realización de la primera audiencia el día 2 de octubre de 2014 a las 16:30 horas, ordenándose la notificación del Demandado según lo establecido en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Esta notificación se realizó con fecha 15 de septiembre de 2014, según consta en el estampado de fs. 35 vuelta.

10. Con fecha 15 de septiembre de 2014, la parte solicitante se dio por expresamente notificada de la resolución que citó a las partes a audiencia de fijación de bases del procedimiento arbitral. Y, mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2014, se tuvo por notificada a esta parte.

11. Con fecha 2 de octubre de 2014, don AB1, abogado patrocinante del Demandado, delegó poder en el abogado habilitado don AB2. Con esa misma fecha, don AB, abogado patrocinante del Demandante, delegó poder en el abogado habilitado don AB3.

12. Según consta en acta rolante a fs. 42, con fecha 2 de octubre de 2014 se llevó a cabo el primer comparendo arbitral. En esta audiencia se tuvieron presentes las delegaciones de poder referidas en el número anterior. Asimismo, dado que las partes expusieron la existencia de cuestiones pendientes en lo relativo al Reglamento aplicable al arbitraje y a los eventuales recursos en contra del Laudo Arbitral, se acordó suspender la audiencia de fijación de procedimiento; fijándose como nuevo día y hora para su continuación el 8 de octubre de 2014 a las 11:30 horas.

13. De esta forma, el 8 de octubre de 2014, a la hora señalada, tuvo lugar la continuación del primer comparendo arbitral, adoptándose el procedimiento que consta en el acta respectiva de fs. 43 y siguientes (en adelante, el Acta de Procedimiento).

14. Mediante presentación de fs. 51 y siguientes, el Demandante interpuso demanda de rendición de cuentas (la Demanda). En ella, el actor hizo reserva de sus derechos y acciones, y acompañó copia de escritura pública de mandato judicial conferido por XX a don AB. A fs. 75 se dio traslado de la demanda, se tuvo presente la reserva de derechos y acciones, y se tuvo por acompañado, con citación, el mandato judicial referido.

15. Con fecha 25 de noviembre de 2014, mediante presentación de fs. 51 el Demandado interpuso las excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal e ineptitud del libelo. Por resolución de fecha 28 de noviembre de 2014 se dio traslado a la parte demandante para contestar dichas excepciones. Con fecha 2 de diciembre de 2014, a fs. 80 y siguientes, el Demandante evacuó el traslado conferido.

16. Con fecha 11 de diciembre de 2014, las excepciones opuestas fueron resueltas, rechazándose la excepción de incompetencia del Tribunal, acogiéndose la excepción de ineptitud del libelo y ordenándose al Demandante que en un plazo de 5 días hábiles presentara nuevamente su demanda corregida.

17. Así, con fecha 18 de diciembre de 2014, el Demandante presentó nuevamente su demanda, rolante a fs. 86 y siguientes de autos. Ella fue proveída con fecha 30 de diciembre de 2014, dándose traslado al Demandado.

18. Con fecha 7 de enero de 2015, el Demandado contestó la demanda de autos, según consta a fs. 113 y siguientes. Y, con fecha 13 de enero de 2015, se tuvo por contestada la demanda, otorgándose traslado al Demandante para replicar.

19. Posteriormente, el 22 de enero de 2015, el Demandante presentó su réplica. Con fecha 16 de marzo de 2015 se tuvo por evacuada la réplica y se dio traslado al Demandado para duplicar.
20. Con fecha 26 de marzo de 2015 se presentó el escrito de dúplica por el Demandado, teniéndose ésta por evacuada con fecha 3 de abril de 2015. En esta misma resolución se citó a las partes a comparendo de conciliación.
21. Según consta en el acta rolante a fs. 128, con fecha 13 de abril de 2015 se llevó a cabo el comparendo de conciliación. En dicha audiencia las partes acordaron suspender el proceso arbitral hasta el 4 de mayo de 2015, a fin de sostener reuniones con miras a una eventual conciliación.
22. Con fecha 4 de mayo de 2015, las partes solicitaron, de común acuerdo, ampliar el plazo referido anteriormente en 20 días, a lo que se dio lugar con fecha 5 de mayo de 2015.
23. A fs. 132, la parte demandante solicitó que se recibiera la causa a prueba, ya que las gestiones realizadas para llegar a un acuerdo no tuvieron resultados positivos.
24. Con fecha 11 de agosto de 2015, se recibió la causa a prueba, siendo fijados los puntos sobre los que ésta debía recaer.
25. Consta entre fs. 137 a 293 de autos, la prueba rendida por ambas partes durante el término probatorio.
26. Con fecha 19 de noviembre de 2015, este Tribunal concedió a las partes un término de 8 días para presentar sus respectivas observaciones a la prueba.
27. (*) A fs. 295 la parte demandada presentó sus observaciones a la prueba dentro de plazo, las que se tuvieron presentes por resolución de fecha 3 de diciembre de 2015. Mediante esta misma resolución, las partes fueron citadas a oír sentencia.

II. ACCIONES, PETICIONES, EXCEPCIONES Y ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. La Demanda

27. (*) A fs. 51 el Demandante deduce acción en contra de la sociedad ZZ Limitada, para que, acogida que sea la demanda, el Demandado rinda detallada cuenta respecto de su administración en el Grupo TR, haciendo expresa reserva de derechos y acciones por administración fraudulenta o negligente y solicitando expresa condena en costas, en caso de oposición.
28. En su libelo, explica el Demandante que don L.F. es representante y socio controlador de la sociedad demandada ZZ Limitada. Dicha sociedad es, a su vez, controladora de la sociedad TR1; que, a su turno, es accionista mayoritaria de la sociedad ZZ S.A. Esta última sociedad, en conjunto con la Fundación TRc) de TR2 de Santiago, son los únicos accionistas de la Sociedad TRa) (con un 93% y un 7%

respectivamente), de servicios funerarios (TRd), (TRe) e inmobiliaria (TRf).

29. En la relación de los hechos que fundan sus pretensiones, señala el Demandante que con fecha 9 de noviembre de 2005, (TRa) celebró con (TRc) un contrato de concesión y comodato de los Cementerios de EE, AA y OO, que tiene por objeto, por sí o por intermedio de sociedades filiales o relacionadas (el Grupo TR), dar solución a las exequias de las personas fallecidas, prestando los servicios funerarios, de sepulturas, de incineración y de depósito de cenizas en columbarios instalados y operados por dicho grupo en parroquias, capillas o santuarios de TR3 de Santiago.

30. Explica a continuación el Demandante que el Grupo TR lo invitó a invertir capital en ese Grupo, en atención a la falta de liquidez del mismo. Es así como, mediante correo electrónico de fecha 1 de agosto de 2012, la empresa TR4, entonces asesor financiero de (TRa), le remitió una presentación con el modelo de inversión diseñado para atraer nuevos inversionistas al Grupo TR. Según el actor, esta presentación daba cuenta de socios que en realidad no tenían ninguna vinculación con el Grupo TR y de un plan estratégico de crecimiento con auspiciosas proyecciones.

31. De acuerdo al actor, durante estas conversaciones preliminares se le señaló que en noviembre de 2012 (TRa) suscribiría un contrato denominado "Modificación de Acuerdo Marco Proyecto Ampliación Cementerio EE Constructora TR5 con (TRa)" que implicaría el ingreso de un importante flujo de caja en la sociedad. Este contrato, sin embargo, no se habría celebrado.

32. El Demandante aceptó el negocio propuesto por el Grupo TR el 26 de julio de 2012, mediante la suscripción del documento denominado Cierre de Negocios; en que se establecieron los elementos esenciales y sustanciales conversados preliminarmente, que llevaron al actor a participar en el negocio. Estos elementos, de acuerdo al Demandante, son:

- i. La necesidad de capital de trabajo correspondía a un déficit de caja temporal;
- ii. En las tratativas comerciales que conducían don E.G. (entonces gerente general de (TRa)) y don L.F. para explicar el modelo de negocios, se expuso sobre los proyectos, contratos, socios y futuros socios, los activos, los pasivos, las proyecciones financieras y los problemas de caja de TR. Se mencionó la enajenación de ciertos activos a empresas de reconocido prestigio, que significarían ingresos cercanos a las UF 100.000;
- iii. Entre los meses de mayo y junio del año 2012, don L.F. invitó al Demandante a participar en el negocio de los cementerios;
- iv. El representante legal del Demandado señaló al actor que existían impedimentos estatutarios para que XX formara parte de la estructura societaria de (TRa), por lo que lo incorporaría a una sociedad "aguas arriba", como supuestamente había hecho anteriormente con otros socios, como por ejemplo TR6;

- v. Asimismo, se le hizo presente al Demandante durante las negociaciones que el Grupo TR7, de Guatemala, también se incorporaría al Grupo TR. La efectiva presencia del Grupo TR7 resultaba determinante para que el Demandante ingresara al negocio, pues se trata de un importante actor internacional en este tipo de modelo de negocios, y, además, el ingreso del Demandante estaría determinado conforme al precio por punto porcentual que se le fijara al Grupo TR7;
- vi. La participación adquirida por el Demandante le daría derecho a nombrar un director titular y uno suplente en TRa);
- vii. El ingreso del Demandante a la sociedad obligaría a los accionistas a suscribir un pacto que estableciese, principalmente, los derechos de compra preferente y las obligaciones de los socios;
- viii. Las partes establecieron una cláusula arbitral, concediéndole competencia a un Árbitro designado por la Cámara de Comercio de Santiago y fijaron su domicilio en la ciudad de Santiago;
- ix. Con fecha 31 de julio de 2012, las partes modificaron este cierre de negocios, pero sin alterar el espíritu inicial de éste.

33. Por escritura pública de fecha 30 de agosto de 2012, el Demandante adquirió 21.621.622 acciones en la sociedad TR1, por un valor de \$749.887.793 que el Demandante pagó mediante la capitalización de créditos sobre el capital social y patrimonio de la compañía, ascendentes a la suma de \$542.514.359 y con \$207.373.474 al contado y en dinero efectivo.

34. Además, por escritura pública de fecha 28 de septiembre de 2012, el Demandante adquirió 13.513.514 acciones más en la sociedad TR1, por un valor de \$486.679.871 que pagó mediante la capitalización de créditos sobre el capital social y patrimonio de la compañía, ascendentes a la suma de \$340.031.978 y con \$128.647.893 al contado y en dinero efectivo. Estas acciones representarían el 14,94% de TR1

35. Con fecha 19 de noviembre de 2012, los accionistas de TR1 suscribieron un pacto de accionistas. Uno de los elementos principales que habría motivado este pacto era la creación de un Comité Financiero asesor de la sociedad TRa). En este Comité el Demandante participaría de manera activa, asesorando al Grupo TR en sus decisiones financieras. Este Comité tendría tres miembros permanentes, dos de los cuales serían designados por el Demandante, y el otro sería el gerente general de TRa).

36. Sin embargo, tras sólo cuatro sesiones del Comité Financiero, el representante legal del Demandado habría dispuesto su suspensión. Según el Demandante, esto se debió a que mediante estos Comités, XX habría podido comprobar que el gerente general de TRa) manipulaba las cifras contables, con el objetivo de mostrar un escenario positivo, donde además los futuros ingresos de caja no correspondían ni a la realidad, ni a los montos esperados.

- 37.** Al revelarse esta situación, el gerente general de TRa) habría propuesto de urgencia un nuevo aumento de capital, pese a que el Demandante había inyectado dineros hace poco. Este aumento finalmente no se produjo, pues se habría decidido, sin serle consultado al actor, suscribir mutuos con una sociedad ligada a otro socio aguas arriba, realizándose operaciones con empresas relacionadas sin el debido control.
- 38.** Además de estos hechos, el Demandante señala que mediante escritura pública de fecha 14 de octubre de 2013 TRa) realizó un reconocimiento de deuda al banco BO por la cantidad de UF 9.008,02. Esta escritura fue complementada por otra de fecha 30 de octubre de 2013, en la cual los socios TRe) y TRd) se habrían constituido en fiadores y codeudores solidarios de TRa) en beneficio del banco BO.
- 39.** De acuerdo al actor, el anterior no habría sido el único reconocimiento de deuda incurrido por el Grupo TR, pues existirían otros. Por ejemplo, consta en escritura pública de fecha 14 de febrero de 2013, que la sociedad TRa) reconoció adeudar a ZZ Limitada la cantidad de UF 138.500,2. Esta suma se habría otorgado como capital de trabajo sin interés alguno, sin perjuicio de reconocérsele a ZZ Limitada, una compensación equivalente al 17,41% de la deuda, que equivaldría "al monto de los intereses que las partes hubieran hipotéticamente pactado en esa oportunidad, pero que atendidas las necesidades de caja y financieras, no fueron consideradas ni pactadas al momento de entregar los respectivos créditos", llegando por lo tanto la deuda a un total de UF 169.839,9.
- 40.** El Demandante agrega que el señor L.F., careciendo de las facultades estatutarias y legales, ha dispuesto la asignación de cargos, contratación y despido de gerentes y apoderados, asumiendo él mismo labores ajenas a la suya, pese a los impedimentos señalados.
- 41.** Además, el Demandante expone que se han dejado de realizar Directorios y que aquéllos que sí han sido citados no se han realizado por la ausencia de directores afines al Demandado. Así, el Demandado estaría manipulando la realización de las Sesiones de Directorio, al no alcanzarse los quórums necesarios por la inasistencia de sus afines, que serían familiares y amigos.
- 42.** En otras oportunidades, agrega el actor, el Demandado habría citado a Sesiones de Directorio sin cumplir con los plazos mínimos estatutarios, obstaculizando así el ejercicio de su derecho a informarse.
- 43.** El Demandante señala que como accionista minoritario carece de las herramientas necesarias para compeler el cumplimiento adecuado del Gobierno Corporativo, más aun cuando ha ido enterándose que la situación financiera dista de aquella que le habría sido informada en su momento por TR4.
- 44.** Señala el Demandante que la situación de TRa) es crítica, lo que ocurre única y exclusivamente por el actuar obscuro y/o negligente de su actual administración, compuesta por el señor L.F. y sus directores afines. A tal punto sería crítica la situación, que algunos acreedores principiaron un proceso concursal, conocido por un Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol 00-2014, y caratulado "Compañía de Seguros TR8 con TR".

45. Según el actor, lo más preocupante sería la situación contable de la empresa. Ésta sería más apremiante de lo que se le había señalado en un comienzo, y no habría presentado una mejoría a pesar de su incorporación a la estructura societaria, que determinó un ingreso a la caja social de casi tres millones de dólares de los Estados Unidos de América.

46. Manifiesta el Demandante su preocupación por la existencia de reconocimientos de deudas por un monto superior a las UF 178.000, sin que estas decisiones se hayan informado al Comité Financiero ni al director nombrado por él.

47. Señala además que importantes activos estratégicos del Grupo TR estarían siendo actualmente objeto de “agresiones jurídicas”, existiendo incluso una sentencia de primer grado que extingue derechos respecto de los mismos.

48. Luego, el Demandante enumera una serie de procesos judiciales en los que se ha visto involucrado el Demandado, incluyendo:

- i.** Juicio de TR9 y TRa) contra Compañía de Seguros TR10, llevado ante el Juzgado Civil de la ciudad de CC, bajo el Rol 00-2013.
- ii.** Juicio caratulado “Compañía de Seguros TR10 con TR9”, Rol 01-2013 de Juzgado Civil de Santiago.
- iii.** Juicio entre Compañía de Seguros TR6 y TRa), Rol N° 02-2014 de Juzgado Civil de Santiago.
- iv.** Juicio entre banco BO y Grupo TR, Rol 03-2013 de Juzgado Civil de Santiago.
- v.** Proceso de exhibición de documentos entre las mismas partes de autos, seguido ante Juzgado Civil de Santiago con el Rol 04-2014.

49. En virtud de todos estos hechos, el Demandante solicita que el Demandado rinda adecuada cuenta del estado de los negocios sociales, acreditando cada una de las partidas y justificando sus decisiones.

50. En cuanto al derecho invocado, el Demandante alega la existencia de derechos subjetivos no sólo respecto de TR1, sino sobre todo el Grupo TR. Funda esta alegación en que la estructura societaria corresponde a una “sociedad cascada”; que tiene carácter piramidal y consiste en una organización societaria compuesta por una serie de sociedades interconectadas entre sí. De acuerdo al actor, el Gobierno Corporativo de estas estructuras societarias, permitiría concentrar el control sobre bloques accionarios, utilizando la cascada, pudiéndose alcanzar cuotas de control sobre una compañía, con una inversión comparativamente menor.

51. Señala el Demandante que el Demandado ha infringido su deber de lealtad para con la sociedad, ya que habría permitido una administración indebida, ineficiente y alejada de cualquier estándar técnico. Se

habrían dejado de hacer Sesiones de Directorio, la gerencia no tendría controles ni contrapesos, habiendo una ausencia, duplicidad e inadecuado ejercicio de cargos.

52. En particular, el actor invoca los Artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil, pues se habría incumplido con el Cierre de Negocios y el posterior Pacto de Accionistas TR1.

53. Alega también el Demandante que el Demandado habría infringido su obligación de mantener el *affectio societatis*, que en este caso existiría por cuanto los intervinientes habrían aceptado vincularse societariamente en consideración a las personas, atendido el vínculo de amistad que existía hace más de cuarenta años entre el señor F.A. y el señor L.F.

54. Además, el Demandante pide específicamente que el Demandado rinda cuenta respecto a sus operaciones con empresas relacionadas, ya que, según su apreciación, no se habrían cumplido los requisitos del Artículo 44 de la Ley N°18.046.

55. (*) En particular, sostiene que la obligación de rendir cuenta se funda tanto en el mandato de administración como en el Artículo 46 de la Ley N°18.046. Pide finalmente que se tome en consideración la estructura societaria de cascadas que tiene el Grupo TR, debiendo rendirse cuenta de cada una de las entidades que administra el Demandado y que forman parte del Grupo TR.

B. Contestación

55. (*) A fs. 113 de autos el Demandado contesta la demanda señalando que ésta debe ser rechazada totalmente, con costas.

56. Indica como antecedentes previos que, efectivamente, con fecha 26 de julio del año 2012 se suscribió un contrato privado denominado Cierre de Negocio entre ZZ Limitada y Administradora Grupo XX S.A. por XX.

57. En dicho contrato se estipuló que Administradora Grupo XX S.A. por XX realizaría un aumento de capital en la sociedad TR1, por el cual XX tomaría una participación del 6,5% de las acciones de dicha sociedad. Se estableció también una fórmula de pago de las acciones, otorgando al Demandante la opción de concurrir a un nuevo aumento de capital dentro de 120 días, el que se limitaría de manera que el Demandado no perdiera el control de TR1.

58. Además, en el Contrato se acordó que TR1 otorgaría los votos necesarios a Administradora Grupo XX S.A. por XX para la designación como director titular de la sociedad TRa) a don F.A. y como director suplente de dicha sociedad a don M.P. También, se otorgó al Demandante el derecho a nombrar como director de TR1 a don F.A.

59. Contestando la demanda, el Demandado señala que el libelo carece de fundamentos, toda vez que el Demandante no conocería la normativa pertinente respecto de la acción de rendición de cuentas, pues

trataría de involucrar a empresas diferentes del Demandado, que no tienen relación alguna con el actor en el contrato celebrado que da origen al juicio de autos, denominado Cierre de Negocios.

60. Agrega que el actor basa su pretensión en los Artículos 1.545 del Código Civil, y 44 y 46 de la Ley 18.046, pero no explica cómo ello le permitiría fundar una acción de rendición de cuentas.

61. Según el Demandado, el Contrato sólo tendría por objeto la adquisición de acciones de la sociedad TR1 por el Demandante, y que se le otorgara por ello, en calidad de socio minoritario, participación en dicha sociedad con un director, además de poder nombrar un director en la sociedad TRa).

62. Añade que la sola lectura del Contrato permite establecer que la acción de rendición de cuentas sobre todo el Grupo TR es improcedente, pues para ello se requeriría la existencia de un mandato o poder delegado en su favor, tanto civil como de administración. Sólo ello permitiría que el mandante o el poderdante pueda exigir una rendición de cuentas.

63. En este caso, según el Demandado, no existiría mandato otorgado por parte del Demandante. Por el contrario, el Contrato hace referencia sólo a la adquisición de acciones dentro de una sola sociedad: TR1.

64. El Demandado plantea que, en atención a lo anterior, el actor debió pedir cuenta respecto de TR1, sociedad de la que es accionista y respecto de la cual posee un director; o solicitar información a TRa), en la cual también posee a un director.

65. El Demandado alega que la razón por la cual no se hizo la solicitud de rendición de cuentas en los términos referidos en el punto anterior es que el Demandante, y en particular su representante, el señor F.A., no habría cumplido su mandato legal y habría decidido dejar de comparecer a los Directorios de las empresas. Sería por esta misma razón que el actor no habría tenido acceso a la información pretendida, ni la habría solicitado mediante el conducto regular, por los medios que establece la ley.

66. Señala el Demandado que exigir una rendición de cuentas a la sociedad TR11 respecto de ella y de todas las demás sociedades que componen el Grupo TR es improcedente y carente de legalidad, pues no existiría ninguna relación de representación, dependencia y/o de administración entre Demandante y Demandado. Ambos serían pares y accionistas de una misma sociedad denominada TR1.

67. Además, alega el Demandado que la acción de rendición de cuentas de autos excede la cláusula arbitral. Ello, porque pese a que el arbitraje sólo sería procedente para resolver las dudas o dificultades que surgieran respecto al Contrato, la actora pretende que la informen de la administración de los negocios de las distintas sociedades de TR y de su propio socio en TR1.

68. Precisamente por lo anterior, añade el Demandado, en la causa Rol 04-2014, seguida ante Juzgado Civil de Santiago entre las mismas partes, el Tribunal habría resuelto no acceder a la exhibición documental de las empresas que componen el Grupo TR, señalando que sólo se podría exigir respecto de ZZ.

69. Concluye el Demandado que no habiéndose invocado ninguna norma que haga admisible la rendición de cuentas, es claro que no existe fundamento alguno para requerir dicha acción, razón por la cual la demanda de autos debe ser rechazada, con costas.

C. Réplica

70. A fs. 121, el Demandante presenta su réplica, señalando que el Demandado ha apuntado a ciertos elementos en su escrito de contestación, que resultan importantes para el debate de autos:

- i. El Demandado reconoce la existencia del contrato denominado Cierre de Negocios, mediante el cual se le habría hecho partícipe del Grupo TR.
- ii. La intención de los contratantes fue participar de un negocio relacionado con el Proyecto TR.
- iii. En esta vinculación se crearon instancias a solicitud del Demandante, como el Comité Financiero, para velar por el buen estado de los negocios.
- iv. En consecuencia, existen claras manifestaciones de voluntad, reconocidas por el propio Demandado, en orden a otorgar derechos políticos al Demandante en el Grupo TR. Ellos estarían siendo desconocidos por el Demandado, que pretende que los derechos del Demandante queden acotados a su relación con ZZ Limitada y TR1, desconociendo la práctica comercial y sus actos propios respecto de las sociedades ubicadas “aguas abajo”.
- v. De acuerdo a su entender, merece especial atención el hecho que el Demandado en su contestación señala que permitió a su parte tener representación en el Directorio de TRa) por su “buena fe contractual”, en circunstancias que hoy pretende desconocer totalmente este principio.
- vi. El juicio que el Demandado menciona en su contestación, actualmente se encuentra en alzada para revocar la resolución que no dio lugar a la exhibición de documentos respecto de las sociedades en cascada.
- vii. Por último señala que la inasistencia del señor F.A. a los Directorios se debió a que ellos fueron citados sin cumplir las formalidades mínimas que establece la ley.

D. Dúplica

71. A fs. 124, el Demandado duplica de la demanda, aduciendo las siguientes consideraciones:

- i. La contraria basa sus argumentos en meras suposiciones, inventando una teoría del velo y de las sociedades cascadas, olvidando que para trabar una litis se deben cumplir normas específicas que al parecer desconoce.
- ii. El Demandante se ha valido de argumentos falaces para explicar su inconsecuencia con respecto a su falta de participación en el Grupo TR, que ha generado problemas al Grupo.

- iii. La contraria pretendería una rendición de cuentas respecto de todo el Grupo TR, en circunstancias que inició los presentes autos mediante una medida prejudicial dirigida únicamente en contra de la sociedad demandada y no en contra de las demás sociedades que integran el Grupo.
- iv. Las sociedades que componen el Grupo TR son personas jurídicas diferentes y con patrimonio propio: el Demandante no puede pretender demandar a terceros sin haberlos emplazado en juicio, para que ellos rindan cuenta.
- v. Pretender que todo el Grupo TR rinda cuentas en virtud del contrato Cierre de Negocios es jurídicamente incorrecto, ya que el Demandante debió haberse dirigido en contra de la sociedad con la cual se relacionó directamente en dicho contrato, es decir, TR1.
- vi. En consecuencia, el actor carece de acción que lo legitime para solicitar una rendición de cuentas en virtud del Cierre de Negocios no sólo respecto de la Demandada, sino que respecto de todo el Grupo TR.

III. ANTECEDENTES PROBATORIOS

A. Resolución que recibe la causa a prueba

72. (*) Mediante resolución de fs. 135, según lo dispuesto en la sección 12 a) del Acta de Procedimiento, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Circunstancias que rodearon la suscripción del contrato denominado Cierre de Negocios y su modificación, de fecha 26 y 31 de julio de 2012 y en particular: (i) características del negocio ofrecido por la demandada y cómo ellas influyeron en la decisión de la demandante, (ii) razones que explican la estructura societaria utilizada por las partes, y (iii) intención común de las partes en la celebración de dichos acuerdos.
2. Existencia de hechos que darían lugar a una obligación de la demandada de rendir cuenta a la demandante bajo los acuerdos referidos en el número (1) precedente; y en la afirmativa, extensión y alcance de dicha obligación.

B. Prueba rendida en autos

i) Documental

78. (*) El Demandante acompañó los siguientes documentos:

Copia de escritura pública de modificación de sociedad ZZ Limitada, de fecha 29 de agosto de 1977, otorgada en la Notaría de don NT1.

Copia de escritura pública de constitución de sociedad ZZ Limitada, de fecha 19 de diciembre de 1989, otorgada en la Notaría de don NT.

Copia de solicitud de protocolización de extracto de sociedad ZZ Limitada, en la que consta inscripción

en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de CS, a fs. 00, número 00, del Registro de Comercio de 1989.

Copia de escritura de Cierre de Negocios de fecha 26 de julio de 2012.

Copia de escritura de Modificación de Cierre de Negocios, de fecha 31 de julio de 2012.

Copia de escritura pública de contrato de Suscripción de Acciones de Administradora Grupo XX S.A. por XX en TR1, de fecha 30 de agosto de 2012, otorgada en la Notaría de don NT2.

Copia de escritura pública de contrato de Suscripción de Acciones de Administradora Grupo XX S.A. por XX en TR1, de fecha 28 de septiembre de 2012, otorgado en la Notaría de don NT2.

Copia de Pacto de Accionistas TR1, de fecha 19 de noviembre de 2012.

Ratificación, adhesión y complementación de Pacto de Accionistas TR1, de fecha 19 de noviembre de 2012.

Copia de escritura de Reconocimiento Unilateral de Deuda y Pago, TRa) a ZZ Limitada, de fecha 14 de febrero de 2013, otorgada en la notaría de don NT2.

Copia de escritura pública de Reconocimiento y Reprogramación de Créditos banco BO1 a TRa), de fecha 14 de octubre de 2013, otorgada en la Notaría de don NT2.

Copia de escritura pública de Complementación TRe) y otra al banco BO1, de fecha 30 de octubre de 2013, otorgada en la Notaría de don NT2.

79. La parte demandada acompañó los siguientes documentos:

Copia de Sesión Extraordinaria de Directorio de TRa) de 13 de noviembre de 2013 y carta de excusa de la misma fecha del señor F.A.

Copia de acta de Sesión de Directorio de TRa) de 20 de noviembre de 2013.

Copia de acta de Sesión de Directorio de TRa) de 18 de diciembre de 2013.

Copia de acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de TRa), de 29 de julio de 2014 y carta de excusa de la misma fecha del señor F.A.

Copia de acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de TRa), de 1 de agosto de 2014 y carta de excusa de la misma fecha del señor F.A.

Copia de carta de renuncia del señor F.A. al Directorio de TRa), de fecha 7 de agosto de 2014.

Copia de acta de Sesión Extraordinaria de Directorio TRa), de 8 de agosto de 2014.

ii) Testimonial

80. La parte Demandante presentó los siguientes testigos:

Don C.J., abogado, domiciliado en DML3, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, cuya declaración consta en acta rolante a fs. 264.

Don M.P., ingeniero comercial, domiciliado en DML1, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, cuya declaración consta en acta rolante a fs. 264.

Don S.M., abogado, domiciliado en DML1, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, cuya declaración consta en acta rolante a fs. 236.

iii) Confesional

81. Rindió prueba confesional don F.A., representante del Demandante. El acta de dicha absolución de posiciones rola a fs. 256 de autos.

iv) Prueba de oficios

82. A solicitud de la parte Demandante, fue acompañado en autos el Oficio N° 00-2014 por TR4, que rola a fs. 293 de autos.

Y CONSIDERANDO QUE:

(i) Respecto de características del negocio entre las partes y cómo ellas influyeron en el Demandante.

83. Tanto en su demanda como en la réplica, el Demandante alega que el estado de los negocios del Grupo TR no se condice con las condiciones informadas al momento de ser suscrito el contrato denominado Cierre de Negocios. Estas condiciones habrían sido precisamente las que lo llevaron a tomar la determinación de invertir en la compra de acciones de TR1.

84. En primer lugar, el actor reclama que fue informado que la falta de liquidez del Grupo TR era meramente temporal, lo que resultó no ser efectivo.

85. Esta falta de liquidez por la que atravesaba el Grupo TR está reconocida expresamente en el contrato denominado Cierre de Negocios. En efecto, en su cláusula 1.4, dicho instrumento señala: "Como resultado de negociaciones sostenidas por las partes y en atención a las necesidades de capital que tienen las empresas del Grupo TR se ha acordado que XX, por su administradora, invierta en dicho grupo en los términos que se indican más adelante en el contrato".

86. Respecto a la efectividad de este hecho están contestes todos los testigos presentados por la parte demandante, don S.M. (según consta a fs. 237 de autos), don C.J. (fs. 267 de autos) y don M.P. (a fs. 275 de autos).

87. El primero de ellos, da cuenta de que la inversión se realizó porque el Grupo TR atravesaba una falta de liquidez de carácter temporal, pues el Grupo tenía proyecciones muy auspiciosas desde un punto de vista financiero.

88. Este testigo, declaró además que “la participación que XX capitalizó aguas arriba en TR1 le iban a permitir tener retornos interesantes en el negocio de TR, que lo presentaban como un negocio en expansión, no habían montos determinados pero sí mostraron, por ejemplo que iban a haber ingresos de cajas de sumas importantes, 100 mil UF por ejemplo, dentro del mismo año 2012, cosa que no se produjo”.

89. Por su parte, don M.P., señaló que “dentro de las cosas que más ratificaron era que efectivamente había una situación hoy día, coyuntural, pero había un desarrollo futuro bastante interesante conjuntamente con indicarnos -que es algo súper relevante para nosotros- que TR6 tenía un socio en 13%”.

90. A lo anterior se suma que durante las negociaciones se habría presentado como una posibilidad cierta el ingreso del Grupo TR7 como socio capitalista del Grupo TR. De acuerdo a los testigos don S.M. y don M.P., esta inversión fue una de las circunstancias que llevó al Demandante a invertir en el Grupo TR, y que sin embargo nunca se concretó.

91. En virtud de lo expuesto, se tiene por acreditado que durante los tratos preliminares previos a la firma del Cierre de Negocios, el Grupo TR informó que atravesaba problemas de liquidez, aunque éstos tendrían un carácter únicamente temporal, debido a las buenas proyecciones del negocio.

92. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que es carga del comprador comprobar el estado del negocio en el que pretende invertir, salvo que las partes alteren contractualmente esta regla general.

93. Dicha regla reconoce su límite en el dolo o el engaño. Sin embargo, la presentación de unas perspectivas económicas auspiciosas del Grupo TR en general, y de TR1 en particular, no pueden considerarse como un engaño, pues las proyecciones futuras de una inversión contienen intrínsecamente un componente de incertidumbre y riesgo con el que debe cargar -salvo que las partes acuerden lo contrario- quien realiza una inversión en la forma de compra de acciones.

94. De hecho, en lo que respecta al posible ingreso del Grupo TR7 como inversor del Grupo TR, es el propio Cierre de Negocios que reconoce esta incertidumbre. En efecto, dicho instrumento establece en sus cláusulas 2 y 3 diferencias en puntos porcentuales en el precio de las acciones, dependiendo si el Grupo TR7 decidía invertir o no en la empresa. Ello demuestra que, si bien el ingreso del Grupo TR7 era una posibilidad al momento de la firma del Cierre de Negocios, ambas partes estaban plenamente conscientes de que ello era incierto.

95. Por último, debe tenerse presente que, incluso si se pudiese arribar a la conclusión de que el Demandante fue víctima de un engaño al contratar con el Demandante, dicho engaño constituiría un vicio del consentimiento por error o dolo, que no ha sido materia de la demanda entablada en autos.

(ii) Respecto de la estructura societaria utilizada para la inversión en el Grupo TR y la intención común de las partes.

96. El contrato denominado Cierre de Negocios demuestra de manera fehaciente que el Demandante ingresó al Grupo TR únicamente mediante la compra de acciones de la sociedad TR1. De acuerdo al actor, esta fórmula de inversión se explica por un contrato de don L.F. con TR12, que impedía al primero perder su control sobre TRa). Esta limitación habría estado replicada, según el Demandante, en el Contrato de Concesión de TR13.

97. Este hecho fue corroborado por el testigo don S.M., quien señaló que “se le impuso a XX por parte de don L.F. y en su entonces gerente general don E.G., la necesidad de capitalizar los créditos en TR1 dado que estaría limitado don L.F. a perder control por parte de pactos, y especialmente del contrato de concesión y comodato y otras modificaciones y otros instrumentos como pacto con TR12, que lo limitaban a perder el control en TR, de tal manera que si perdía el control se caía -para decirlo bien gráfico- el contrato de concesión que era el principal activo de TRa), el Contrato de concesión de TR13” (fs. 238). En este mismo sentido declararon los testigos don C.J. a fs. 266 y don M.P. a fs. 277 y 278.

98. La declaración de los testigos referidos permite tener por acreditado que el hecho por el que las partes acordaron que la inversión del demandante en Grupo TR se materializaría en TR1, fue que el señor L.F. dijo al Demandante que esta fórmula era la única que le permitiría cumplir con sus acuerdos con TR12.

99. En el contexto descrito, el Demandante alega que, pese a que la inversión se concretó “aguas arriba”, en TR1, él posee derechos subjetivos sobre todas las sociedades que componen el Grupo TR. Ello, por la naturaleza de la estructura societaria de este Grupo, cuyo Gobierno Corporativo se conoce como “sociedad cascada”, que tendría la particularidad de permitir a los accionistas alcanzar cuotas de control sobre una compañía con una inversión comparativamente menor.

100. La prueba rendida en autos confirma que, aunque el Demandante sólo adquirió la calidad de accionista en TR1, efectivamente las partes estuvieron de acuerdo en conferirle ciertos derechos adicionales. Concretamente, en el Pacto de Accionistas se estableció la creación de un Comité Financiero para la asesoría directa de TRa); y, por otro lado, obligó al Demandado a permitir al Demandante escoger a uno de los directores de ZZ S.A. y TRa).

101. Sin embargo, la creación del Comité Financiero y la facultad para designar a uno de los directores en otras sociedades del Grupo TR no acreditan una supuesta intención de las partes de conferir derechos generales al Demandante en la administración de las diversas sociedades que conforman el Grupo TR. Por el contrario, se trata de acuerdos específicos, que no alteran las normas sobre las sociedades y su administración que rigen en nuestro ordenamiento jurídico; en particular el principio fundamental de separación de la personalidad jurídica entre la sociedad y sus socios, que consagra el Artículo 2.053, inciso segundo del Código Civil.

102. La tesis del actor según la cual la estructura de “sociedades cascada” le otorga derechos políticos en relación con todo el Grupo TR, no ha sido refrendada en autos por norma, jurisprudencia o doctrina algunas. El Demandante invoca genéricamente la Ley 18.046, pero no señala cómo ésta permitiría sustentar sus pretensiones.

103. En conclusión, pese a que el Demandado otorgó contractualmente al actor derechos para incidir indirectamente en la administración de TRa), esta facultad no puede extenderse más allá de dichos derechos específicos y concretos ni otorgarle derechos políticos sobre todo el Grupo TR. Ello supondría un levantamiento del velo corporativo, que el actor no ha alegado ni fundamentado en los hechos o en el derecho.

(iii) En cuanto a la existencia y eventual alcance de la obligación de rendición de cuentas.

104. La acción de rendición de cuentas procede tratándose de relaciones de carácter fiduciario, en que existe administración de un patrimonio ajeno por un tercero (Barros, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Ed. Jurídica de Chile, 2006, p. 855; Alcalde, Enrique, “La Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas”. Ediciones UC, p. 159). La relación entre el Demandante y el Demandado, empero, no tiene tal carácter.

105. En efecto, según se ha acreditado en autos, XX y ZZ Limitada únicamente comparten la calidad de accionistas de la sociedad TR1. Ninguna relación fiduciaria existe entre éste y aquél que permita fundar una acción de rendición de cuentas; circunstancia que no se ve alterada por el solo hecho que el Demandante haya obtenido, mediante un pacto de accionistas, el derecho contractual a designar un director en otras sociedades del Grupo TR.

106. El Demandante no ha presentado antecedentes fácticos que permitan establecer la supuesta obligación de rendir cuenta cuya declaración pretende. En particular, no se ha acreditado la existencia de tal obligación con base en la doctrina de los actos propios o la práctica comercial.

107. En cuanto a las normas jurídicas invocadas por el actor, ninguna de ellas permite fundamentar la supuesta obligación de rendir cuenta. El Artículo 1.545 establece en términos genéricos el efecto obligatorio de los contratos. El Artículo 46 de la Ley 18.046, en tanto, se refiere a las obligaciones de información de los directores en las sociedades anónimas; pero no establece el deber de rendir cuentas de un accionista respecto de otros.

108. En conclusión, puesto que XX únicamente tiene la calidad de accionista de TR1, carece de legitimación activa para exigir la rendición de cuentas al Demandado respecto de la administración del Grupo TR.

109. Más aun, considerando que el presente arbitraje se ha constituido en virtud de la cláusula novena del Cierre de Negocios únicamente para conocer y resolver las dudas o dificultades que surjan respecto de dicho contrato, este Árbitro carece de jurisdicción para ordenar una rendición de cuentas respecto de todas la sociedades que componen el Grupo TR, que tampoco han sido emplazadas en autos.

110. Las consideraciones referidas obligan a rechazar la demanda de autos.

111. Debe advertirse que lo anterior no significa desechar los alegatos que ha formulado el Demandante con respecto a la administración del Grupo TR. La prueba rendida en autos permite colegir la existencia de ciertas irregularidades, particularmente en cuanto al funcionamiento del Directorio de TRa) durante el año 2014 y la existencia de operaciones con partes relacionadas. Sin embargo, estas posibles irregularidades, si bien han sido alegadas por el actor, no forman parte de la acción ejercida ante este Árbitro, por lo que este Tribunal no podrá pronunciarse a su respecto en lo resolutivo del presente Laudo.

112. Se deja constancia que se ha analizado toda la prueba rendida en autos y que se han tenido presentes todos los argumentos presentados por las partes. Aquellas alegaciones y antecedentes no referidos expresamente en el presente Laudo, se han omitido por no haber sido considerados relevantes por este Árbitro a la hora de resolver.

Y EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 636 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ARTÍCULO 35 Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DEL CAM Y DEMÁS NORMAS APLICABLES,

RESUELVO:

1.- Que se rechaza la demanda de rendición de cuentas de XX en contra de ZZ.

2.- Que no se condena en costas a la parte vencida por haber tenido motivo plausible para litigar; de modo que cada parte deberá soportar sus costas y gastos judiciales, incluyendo los honorarios del Tribunal Arbitral y la tasa administrativa del CAM.

Notifíquese el presente Laudo a ambas partes por cédula a través de receptor judicial, sin perjuicio de que éstas puedan notificarse personalmente de la Sentencia ante la Secretaria General del CAM Santiago, o ante quien la reemplace o subrogue.

Felipe Ossa Guzmán. Árbitro Mixto. Santiago, 21 de enero de 2016.

() Transcripción textual de la Sentencia*